



El papel de la Corte en esta dictadura

(Beatriz Pagés)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó por unanimidad la llamada Ley Bonilla por considerar que se trataba de “un gran fraude a la Constitución”.

Con esa resolución, los ministros, impidieron, –al menos de momento– que prospere el proyecto reeleccionista de López Obrador a través de la prolongación de mandato y donde el gobernador de Baja California operó como “conejillo de indias”.

Un cuestionado Poder Judicial, criticado en los últimos tiempos, por su evidente sumisión ante el Presidente de la República, decidió, esta vez, que el Martillo de la Justicia protegiera el principio de no reelección, eje fundamental de la democracia mexicana.

Con esa decisión, la Suprema Corte de Justicia le dio respiración de boca a boca a la división de poderes y recuperó parte de la credibilidad perdida. Pocas veces, –hay que decirlo–, un solo poder, ha hecho tanto, en momentos tan aciagos, por el futuro de México.

Sin embargo, la duda persiste: ¿Qué papel va a jugar el Poder Judicial, de aquí para adelante, ante un Jefe de Estado decidido a destruir el orden legal para implantar una autocracia?

La ponencia del ministro Fernando Franco en la que sustenta la ilegalidad de la Ley Bonilla, es una pieza fundamental para entender el peligro que enfrenta hoy el país.

La iniciativa aprobada en Baja California no solo es un “fraude a la Constitución”, es la crónica de una dictadura anunciada. Contiene las tácticas a las que acostumbra recurrir la 4T para desmontar los pilares de la democracia constitucional e imponer las bases de un régimen totalitario.

La limitaciones y el desabasto

(José Eduardo Campos)

La interrupción en las líneas de producción ha comenzado a impactar en uno de los ámbitos más sensibles para la humanidad, me refiero al alimentario. En los Estados Unidos por ejemplo la venta de carne en los supermercados está limitada a 2 libras por persona, (poco más de un kilo) ante el cierre de las empresas emparadoras en todo el país, lo que ha comenzado a generar un temor de un desabasto.



Ante esta situación el gobierno de Donald Trump ha comenzado a actuar, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) esta facilitando la extensión de visas temporales de trabajo (H-2B) en diversas áreas y una de las beneficiadas es la de alimentos, donde según datos de la organización “Nueva economía Americana”, son inmigrantes.

Abundando en esta información, amigo lector, los trabajadores inmigrantes representan el 49.1 por ciento de los procesadores de carne y, el 53.6 por ciento de los empacadores. En restaurantes y servicio de alimentos, el 20.5 por ciento de la fuerza laboral es de origen extranjero, incluido el 31 por ciento de los chefs y cocineros; el 21.1 por ciento de los trabajadores de preparación de alimentos y el 18.2 por ciento de los trabajadores de entrega.

En las empacadoras de carne se registraron altos números de contagios de Covid-19 en días pasados, por ejemplo, en la compañía Smithfield en Dakota del Sur, más de 500 trabajadores resultaron infectados, lo que obligó a su cierre total, situaciones como éstas se presentaron a lo largo de todo el territorio estadounidense lo que comenzó a impactar en el suministro del producto.

Más de 11 mil casos de coronavirus en todo Estados Unidos están vinculados a la industria empacadora de carne. Se estima que por lo menos 170 plantas en 31 estados han presentado casos de contagios, incluso 47 trabajadores de ellas han perdieron la vida. Lo contagios en las procesadoras y empacadores de carne, comenzaron a llamar la atención desde el pasado 22 de abril, lo que despertó una señal más de emergencia nacional.

Sabías qué... Hay mucha impaciencia por la vacuna (Redacción)

Partamos de dos hechos para entender este tema. Por un lado, diversos especialistas en epidemias, ante la manera en que el Covid-19 se ha desarrollado y afectado a muchos países –incluyendo mutaciones–, han señalado que todos acabaremos siendo infectados por el virus; por otra parte, esto hace que urge una vacuna para evitar más muertes, pero se trata de algo cuyo desarrollo puede implicar años.

El desarrollo de una vacuna puede tardar hasta 10 años, luego de las pruebas de laboratorio, con animales y ensayos con seres humanos, así como la certificación por parte de los organismos reguladores, antes de la aceptación y comercialización.

La inversión para este tipo de desarrollo puede llegar a miles de millones de dólares, por lo que son laboratorios privados los principales desarrolladores de las vacunas, pues ningún gobierno –de cualquier tendencia ideológica– puede invertir tales cantidades de dinero.



Pero en el actual escenario de pandemia, los esfuerzos están logrando acortar los plazos y es probable que para 2021 se tengan los primeros ensayos de una o varias vacunas contra el coronavirus que actualmente afecta al mundo.

No obstante, la urgencia por tener una vacuna cuánto antes ha llevado a ciertos personajes a tratar de presionar a organismos internacionales, como Naciones Unidas, a que trabajen para lograr la vacuna cuánto antes, como si esto fuera cuestión de voluntad.

Claro que también hay quien acusa que todo esto es algo provocado para enriquecer a las farmacéuticas, incluso asegurando que se inflan las cifras de muertos, contrario a las recientes denuncias de que no hay cifras confiables de los decesos.